



H. Senadora Luz Ebensperger O.

BOLETÍN N° 10.626-07

Denominación:	Regula el derecho de filiación de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo
Origen:	Moción parlamentaria
Trámite:	1° Constitucional H. Senado/ la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes
Urgencia:	Acuerdos de Comités
Otros comentarios:	

Intervención sugerida

Presidente;

Este proyecto es mucho más de lo que se puede suponer de su lectura.

Parto por señalar que su nombre oculta que estamos autorizando la adopción homoparental, la filiación del mismo carácter y alterando las reglas básicas de estas materias en el Derecho de Familia nacional. Me hubiese gustado, en mi calidad de abogado, y considerando la importancia de los temas, se atendiera a un mayor número de técnicos y especialistas en la materia.

A raíz de este proyecto, estudié la historia de la Ley N° 19.585, que Modificó el Código Civil y Otros Cuerpos Legales en Materia de Filiación. Esa ha sido sin duda la modificación más importante en la historia de nuestro



H. Senadora Luz Ebensperger O.

país en la materia. Ahí se fijó el marco actual y el valor de las pruebas periciales biológicas y del artículo 182 del Código Civil en cuando a técnicas de reproducción humana asistida.

Por la profundidad de las discusiones de aquella época, a favor y en contra, de derecha y izquierda, es que me permito plantear a esta sala que este proyecto debería ser conocido por la comisión de constitución, legislación, justicia y reglamento ya en la discusión en general. Nuestros antecesores así lo hicieron y la seriedad nos exige lo mismo. ¡estamos modificando el régimen general de filiación! ¡es cosa de leer presidente el informe de la Corte Suprema referente al recurso que se crea! ¡falta técnica presidente, técnica jurídica!

Pongo dos o tres ejemplos en que era necesario que discusión se detuviera con cuidado:

1). En el caso de las modificaciones al artículo 182 del Código Civil ¿Que pasa con los derechos del niño en relación a su padre biológico? ¿Es que acaso vulneraremos el DERECHO, DERECHO CON MAYÚSCULA, establecido en el artículo 7º de la Convención Sobre los Derechos de los Niños de conocer a su padre y mantener una relación directa y regular? Atención presidente, porque un análisis de convencionalidad -tan en boga últimamente- nos podría hacer concluir que estamos estableciendo una separación legal entre un padre y su hijo. Derecho/ deber que obviamente, aún firmando todos los formularios del mundo, no se puede renunciar por anticipado.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

2). La modificación del régimen general imperante tendrá consecuencias en el régimen de relación directa y regular, en la obligación de alimentos, la posesión notaria del estado civil, derecho sucesorio, entre otras materias, del que el proyecto no se hace cargo. Como dije, cuando en el pasado se estudiaron estas materias, se hizo con particular cuidado en los detalles.

3). Con la modificación de la Ley N° 19.620, se quiere obviar una discusión que ya está en este Senado. En efecto, en mayo pasado llegó en segundo trámite el proyecto de ley de Reforma Integral al Sistema de Adopción en Chile (Boletín N° 9.119-18) permitiendo a ambos convivientes civiles y, no sólo parejas lesbianas como afirma la idea matriz del proyecto. De ahí que los fundamentos de la moción ejemplifiquen en derecho comparado, pero todos los ejemplos que cita son precisamente de matrimonio homosexual. Sinceremos las intenciones, no es posible que a raíz de una idea concreta se pretenda legislar sobre todas estas otras materias. El que quiera hacer esas reformas que lo diga claramente, que las defienda frente a los ciudadanos.

Me gustaría rechazar un argumento falaz que aquí y muchas veces en la discusión pública se utiliza. Claro que esta es una discusión valórica y de creencias. Nosotros todos señores senadores tenemos una concepción de familia y sociedad. Sinceremos frente a la ciudadanía por lo que estamos votando.

Precisamente, es por creer que este proyecto no favorece el interés superior del niño, si no por el contrario tiene el potencial de afectarlo, es que anuncio mi voto en contra del proyecto de ley.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

BOLETÍN N° 13.027-11.

Denominación:	Autoriza la intermediación de medicamentos por parte de Cenabast a almacenes farmacéuticos y farmacias privadas
Origen:	Ejecutivo (MINSAL)
Trámite:	2° Constitucional H. Senado/ Comisiones de Salud
Urgencia:	Discusión Inmediata
Otros comentarios:	<p>La comisión fue autorizada a discutir en general y particular la iniciativa.</p> <p>Se encuentra en tramitación en 3° trámite ante el H. Senado el proyecto de ley conocido como Fármacos II (Boletín N° 9.914-03) que entre otras autoriza la autoridad a fijar precios de medicamentos, obliga el uso de la Denominación Común Internacional (DCI) y simplifica el registro de estos. Todo con el objeto de rebajar el precio de los medicamentos.</p>



H. Senadora Luz Ebensperger O.

CONSIDERACIONES

La Fiscalía Nacional Económica ha publicado en noviembre último su Informe Preliminar Estudio de Mercado de Medicamentos. Ese estudio, que se encuentra en fase de observaciones, pudo constatar una serie de ineficiencias en el mercado de los medicamentos tales como barreras de entrada a medicamentos extranjeros, no utilización de la denominación común internacional (que eliminaría asimetrías de información de los pacientes); falta de procedimiento de inscripción en el Instituto de Salud Pública, falta de información en el mercado, integración vertical entre laboratorios y farmacias, promueblas de agencia de los médicos, lo que en definitiva redundaría en diferencias de precios de venta a cadenas de farmacias, al sector institucional privado (clínicas por ejemplo) y al sector público. (Subsecretaría de Redes Asistenciales, Subsecretaría de Salud Pública, Fondo Nacional de Salud y cualquier organismo, entidad o persona adscrita al Sistema Nacional de Servicios de Salud (“SNSS”), que conservaría no obstante la facultad de adquirir esos medicamentos directamente del mercado).

Ese estudio, entre muchas otras materias, estudió el papel de la Central Abastecimiento Del Sistema Nacional Servicio De Salud (CENABAST) en su carácter de intermediador de medicamentos a solicitud de los Servicios de Salud, municipios y hospitales. La Fiscalía pudo constatar que por comprar mayores volúmenes CENABAST accede a precios más bajos que el resto de los compradores públicos, pero que, a igual cantidad, CENABAST incurre en precios 10% superiores.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

Hoy la Central Nacional de Abastecimiento es una institución pública, descentralizada, que depende del Ministerio de Salud y está dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio. Se rige principalmente por las normas del DFL N°1 del Ministerio de Salud del año 2005. Los recursos de CENABAST provienen de los recursos que obtiene en su carácter de comisionista (mandatario) por la intermediación que realiza.

Ese mismo estudio recomendó, entre otras medias, que CENABAST pueda fijar un precio de venta directa al público en el que se incluiría desde luego el cobro por su labor de intermediación, de manera que la farmacia obtenga un monto fijo en pesos por dispensar cualquier producto y que no tenga incentivo alguno para dispensar un producto sobre otro (y que el precio de adquisición se traspase al consumidor). Acota ese organismo que, si este mecanismo funciona adecuadamente, tiene más incentivos para dispensar los medicamentos más baratos puesto que esto le generaría mayor tráfico de clientes en la farmacia y menor capital de trabajo circulando.

El proyecto de ley modifica el Código Sanitario para incorporar un nuevo artículo 70 bis para autorizar a la CENABAST **para intermediar medicamentos respecto a farmacias, almacenes terapéuticos así como establecimiento de salud sin fines de lucro**¹ (art. 121 del Código Sanitario) cuando exista una diferencia sustancial entre el precio en que el medicamento se vende en Chile y el precio de referencia externo equivalente, según lo establezca el reglamento.

¹ Artículo 121.- Son establecimientos del área de la salud aquellas entidades públicas o privadas que realizan o contribuyen a la ejecución de acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de las personas enfermas.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

Las mismas funciones podrá ejercer la Central para el caso de instituciones u organizaciones sin fines de lucro vinculadas con prestaciones de salud, en la medida en que estas cumplan con los requisitos establecidos en el Código Sanitario.

CENABAST procederá a la provisión de los productos sanitarios según las reglas de su operación. Para ese efecto, la central podrá acumular la demanda de los establecimientos del sistema, pudiendo negarse únicamente cuando no se cumplan los requisitos establecidos en la ley o no suponga una ventaja en las condiciones comerciales. En ese orden de ideas, la Central priorizará las solicitudes de convenios a las empresas de menor tamaño conforme el artículo segundo de la ley N° 20.416, que Fija normas especiales para las empresas de menor tamaño.

Para esos efectos, la Central podrá importar, adquirir, almacenar, distribuir, transportar, arrendar y vender los medicamentos, dispositivos médicos y demás productos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. por razones calificadas por la autoridad sanitaria, como la insuficiente capacidad de oferta o desabastecimiento de productos sanitarios podrá exceptuarse de algunas de la obligación de suscribir el contrato de suministro, bastando al efecto la orden de compra o de constituir garantías de fiel cumplimiento. No obstante, debe adoptar las medidas antes del pago para verificar la recepción conforme de los productos. Insuficiencia de oferta o desabastecimiento. (excepción de la ley de compras públicas).

Adicionalmente, a partir de la dictación de la ley, existe la prohibición expresa de intermediar para farmacias o almaneces sancionados por infracción de la libre competencia D.L. 211.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

Para realizar esta nueva labor que se le encomienda, la Central deberá constituir un consejo consultivo conformado por el Director de CENABAST o quien este designe, por un representante del Director de FONASA, un representante del Director del Instituto de Salud Pública, y por tres economistas con experiencia demostrada en mercados regulados. Al menos uno de estos últimos deberá poseer conocimientos en economía de la salud.

Este consejo recomendará, de acuerdo con la duración de las licitaciones que realice la Central, **el precio máximo de venta al público** que podrán cobrar las farmacias, almacenes farmacéuticos o establecimientos de salud, respecto de los medicamentos adquiridos mediante el procedimiento establecido en este artículo. Las deliberaciones y estadísticas de ese consejo revisten el carácter de públicas. La venta por un valor superior al establecido por la CENABAST será sancionado con multa a beneficio fiscal de 500 UTM:

El nuevo artículo 70 quater del proyecto, obliga a las farmacias y almacenes farmacéuticos que intermedien con la CENABAST, a mantener un petitorio mínimo de medicamentos. De esa obligación queda exceptuada las entidades sin fines de lucro. La contravención a la obligación de mantener un petitorio mínimo se sanciona con una multa a beneficio fiscal de 250 UTM:

Finalmente, el artículo 1º transitorio establece la entrada en vigencia al sistema de intermediación de CENABAST. Así, 90 días para la una farmacia que sea el único expendio de una localidad, 12 meses desde promulgada la ley para pequeñas farmacias perteneciente a cadenas regionales y 24 meses para farmacias de cadena.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

BOLETÍN N° 13.102-05

Denominación:	Entrega un bono extraordinario de apoyo familiar
Origen:	Ejecutivo (Hacienda)
Trámite:	2° Constitucional H. Senado/ Comisiones de Hacienda
Urgencia:	Discusión Inmediata
Otros comentarios:	

CONSIDERACIONES GENERALES.

El proyecto de ley entrega por una sola vez un bono extraordinario de cargo fiscal, no imponible ni tributable, por un monto total de \$50.000-. (Cincuenta mil pesos) a quienes al 30 de septiembre de 2019, a:

- 1) Todos los beneficiarios del subsidio familiar establecido la ley N° 18.020, (1.063.479 beneficiarios según el detalle del informe financiero del proyecto).
- 2) Los beneficiarios de la asignación familiar y de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1981, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (2.080.842 beneficiarios según el detalle del informe financiero del proyecto).
- 3) Las personas o familias usuarias del " Subsistema Seguridades y Oportunidades", creado por la ley N° 20.595, independientemente de si perciben a la fecha de la publicación de la ley transferencias



H. Senadora Luz Ebensperger O.

monetarias por esta causa, y (90.848 beneficiarios según el detalle del informe financiero del proyecto).

- 4) las familias que, a esa fecha, estén participando en el subsistema "Chile Solidario", siempre que se trate de familias que no sean beneficiarias de alguno de los subsidios o asignaciones antes mencionadas.

Como se dijo, la suma del bono ascenderá a \$50.000.- por cada causante acreditado como tal, al 30 de septiembre de 2019. De ahí que por ejemplo una familia que recibe dos subsidios por dos cargas recibirá una suma de \$100.000.-.

La entrega del bono busca beneficiar, en el contexto de la agenda social del gobierno, a más de 1.555.193 de beneficiarios, con la entrega de 3.235.169 bonos y 1.3 millones de hogares más vulnerables del país.

El bono es de cargo fiscal -se imputará a la partida tesoro público de la ley de presupuestos del sector público del año 2019- y derecho al mismo se devenga desde la publicación de la ley. Lo paga el Instituto de Previsión Social (I.P.S), en una sola cuota, a partir del mes en que se publique esta ley. (art. 3º), para lo cual podrá suscribir convenios con instituciones públicas o privadas que cuenten con una red de atención al público significativa, entre las que se encuentra por mención expresa el Banco del Estado de Chile.

En lo que resguarda al personal de las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas y que participen en la administración del



H. Senadora Luz Ebensperger O.

sistema de asignación familiar, con la sola excepción del personal municipal, lo efectuarán directamente a su personal juntamente con la remuneración correspondiente al mes en que se publique esta ley o a más tardar junto a la del mes siguiente.

El Instituto de Previsión Social será competente para conocer y resolver los reclamos relacionados con las materias del bono que establece esta ley, de conformidad con lo establecido en la ley N° 19.880, y de acuerdo a las normas que imparta la Superintendencia de Seguridad Social (art. 5°). En todo caso, el plazo para reclamar por el no otorgamiento del bono a que se refiere esta ley será de un año, contado desde la publicación de esta ley.

Finalmente, el artículo 6° del proyecto sanciona a quienes perciban indebidamente el bono. Obligándolo a restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas de conformidad con la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) determinada por el Instituto Nacional de Estadísticas entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

BOLETÍN N° 13.114-05

Denominación:	Otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del Sector Público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales
Origen:	Ejecutivo (M de Hacienda/Trabajo)
Trámite:	2° Constitucional H. Senado/ Comisión de Hacienda
Urgencia:	Discusión Inmediata
Otros comentarios:	Rechazado en la H. Cámara de Diputados. Insistido por el Ejecutivo de conformidad al art. 68 C.P.R Art. 99 C.P.R

RESUMEN EJECUTIVO.

I). El proyecto otorga un reajuste de las remuneraciones del sector público de 0,7%, a contar del 1 de diciembre de 2019, para las rentas brutas superiores a M\$2 (y equivalentes). Para aquellos funcionarios rentas brutas inferiores a M\$2, su liquidación será de 2.8%.

Ese reajuste aplicará a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponible para salud y pensiones, o no imponible, asociadas a los grados, niveles o categorías que se señalen y en general a aquellas a que tengan derecho los funcionarios No se consideran



H. Senadora Luz Ebensperger O.

dentro de la remuneración -y por tanto no se aplica el reajuste sobre esas sumas- a la asignación de zona y bonificaciones especiales de zonas extremas, las bonificaciones, asignaciones y bonos asociados al desempeño individual, colectivo o institucional. (a los funcionarios con jornada parcial, se les aplicará proporcionalmente el reajuste).

II). La unidad de subvención educacional se reajusta un 2,8%. (se encuentra vinculada al reajuste de las remuneraciones del sector público).

III). No se reajustan las remuneraciones del Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Subsecretarios, los Intendentes, el Presidente de la Corte Suprema, los Ministros de la Corte Suprema, el Fiscal de la Corte Suprema y el Contralor General de la República. Al no reajustarse la remuneración de los Ministros de Estado, a quién ha de estarse para la determinación de dieta parlamentaria, esta no se reajustará.

IV). Aguinaldo de Navidad sector activoEl monto del aguinaldo será de \$57.873.- para los trabajadores cuya remuneración líquida percibida en el mes de noviembre de 2019 sea igual o inferior a \$773.271.- y de \$30.613.- para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad

V). El proyecto concede por una vez un Aguinaldo de Fiestas Patrias. para el año 2020, a los trabajadores que, al 31 de agosto del mismo año desempeñen cargos de planta o a contrata por un monto de de \$74.516.- para los trabajadores cuya remuneración líquida que les corresponda percibir en el mes de agosto del año 2020 sea igual o inferior a \$773.271.- y de \$51.727.- para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad.

VI). Concede también un bono de escolaridad no imponible, por cada hijo entre los cuatro y veinticuatro años de edad, que sea carga familiar reconocida por la ley, que se encuentre cursando estudios regulares en los



H. Senadora Luz Ebensperger O.

niveles de enseñanza pre-básica del primer y segundo nivel de transición, educación básica o media, educación superior o especial El monto del bono asciende a la cantidad de \$72.468.-, que será pagado en dos cuotas iguales de \$36.234.- cada una, la primera en marzo y la segunda en junio del año 2020

VII). El artículo 16 del proyecto, asimismo, fija para el 2020, en \$126.241.- el aporte anual para los Servicios de Bienestar y la base para determinar el monto del aporte extraordinario del artículo 13 de la ley N° 19.553, que Concede Asignación de Modernización y Otros Beneficios que Indica.

VIII). El artículo 17 del proyecto incrementa, para el año 2019, en \$ 4.289.051.- miles, Aporte Fiscal Directo a las Universidades Tradicionales que señala el artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 4, de 1981, del Ministerio de Educación.

IX). Otorga también un bono de invierno para pensionados por un total de \$64.549.- Dicho bono se pagará en el mes de mayo del año 2020, a todos los pensionados antes señalados, que el primer día de dicho mes tengan 65 o más años.

X). El Aguinaldo de fiestas patrias para pensionados se fija en \$20.082, para quienes, al 31 de agosto del año 2020, tengan la calidad de beneficiarios de pensiones básicas solidarias y quienes se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal conforme el título VII del decreto ley N° 3.500 de 1980 las víctimas directas afectadas por las violaciones a los derechos humanos, de la ley N° 19.992 de los trabajadores del carbón, y del subsidio para las personas con discapacidad mental.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

XI). El Aguinaldo Navidad de quienes revistan la calidad de Pensionados al 30 de noviembre del año 2020, el que ascenderá a \$23.081.- por cada pensionado, incrementándose en \$13.040.- por cada persona que, a la misma fecha, tengan acreditadas como causantes de asignación familiar o maternal.

XII). Se concede un bono de vacaciones, no imponible, que se pagará en el curso del mes de enero de 2020, cuyo monto será de \$122.332.- para los funcionarios cuya remuneración líquida que les corresponda percibir en el mes de noviembre de 2019 sea igual o inferior a \$773.271.-, y de \$85.324.- para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad y no exceda de una remuneración bruta de \$2.560.669.

XIII) Bono de Desempeño Laboral que se otorga por una sola vez, y su valor será de \$279.806.- para los asistentes de la educación que obtengan el 80% o más del valor del indicador general de evaluación. En el caso de aquellos asistentes de la educación que obtengan un resultado menor al 80% pero superior al 55%, el bono que percibirán será de \$214.113.- Cuando el resultado del índice general de evaluación sea igual o inferior al 55%, el bono será de \$164.234.

XIV). Bono zona Extrema (Incluye Tarapacá). Se extiende durante el año 2020, la vigencia del bono del artículo 44 de la ley N° 20.883, el cual ascenderá a un monto de \$ 132.298 brutos anuales para los trabajadores que sean beneficiarios de las bonificaciones señaladas en los artículos: 13 de la ley N° 20.212; 3° de la ley N° 20.198; 3° de la ley N° 20.250; y el artículo 30 de la ley N° 20.313 y que perciban una remuneración mensual bruta igual o inferior a \$790.020.- durante el mes inmediatamente anterior al pago de la cuota respectiva. Además, se faculta a las Universidades Estatales



H. Senadora Luz Ebensperger O.

Arturo Prat, de Antofagasta, de Tarapacá, de Aysén y de Magallanes a otorgar durante dicho año el mismo bono.

XV). Se crea para todo el año 2020, una asignación a los profesionales de la educación que cuenten con un título profesional de profesor de Educación Diferencial que hayan ingresado al Sistema de Desarrollo Profesional Docente de la ley N° 20.903, y aprueben los cursos correspondientes.

XVI). Se otorga un bono especial para los trabajadores manipuladores de alimentos adscritos al programa de alimentación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, ascendente a \$430.000.-, que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en la norma que por este proyecto de ley se propone.

XVII) Otorga un bono mensual a los trabajadores del sector público que indica, con remuneraciones inferiores a \$512.000. será de \$30.000 mensuales.

XVIII) Por regla general, los montos entregados con cargo a esta ley son de cargo del Fisco tratándose de órganos y servicios públicos centralizados, y de la propia entidad empleadora en los demás casos.

XIX) Algunas de las normas tienen como tope los trabajadores cuyas remuneraciones brutas de carácter permanente en los meses que en cada caso correspondan, sean igual o inferior a \$2.560.669.-, de Navidad, de Fiestas Patrias y bono de escolaridad.

XX) El proyecto otorga la facultad a los jefes superiores de las Subsecretarías, de los servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República, para eximir del control



H. Senadora Luz Ebensperger O.

horario hasta el porcentaje de la dotación máxima de personal del Servicio, que mediante resolución autorice la Dirección de Presupuestos, con excepción de aquellos que pertenezcan a la planta Directiva, o desempeñen funciones de jefatura, a fin de que estos puedan trabajar fuera de las dependencias institucionales, empleando los medios informáticos.

XXI) Finalmente, Se establece que en los casos de ausencia temporal o accidental del Contralor General será subrogado por el jefe de departamento en el orden que determine mediante resolución. (materia de L.O.C / votación separada). Art. 99 CPR. (inciso final).



H. Senadora Luz Ebensperger O.

BOLETÍN N° 13.090-25

Denominación:	Modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica
Origen:	Moción
Trámite:	2° Constitucional H. Senado/ Comisiones de Seguridad Pública
Urgencia:	Discusión Inmediata
Otros comentarios:	Votación en general y particular a la vez. En anexo “Informe Diario de Estado de Situación al 03.12.2019” Subsecretaría del Interior. Y proyecto de ley Boletín N° 13.058

CONSIDERACIONES.

El proyecto de ley de artículo único intercala en el Párrafo II del Título Sexto del Libro Segundo del Código Penal un nuevo artículo 268 septies, que pena al que valiéndose de una manifestación o reunión pública tomare parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público con reclusión menor en su grado medio a máximo. Establece por la vía ejemplar lo que ha de entenderse por desordenes públicos, entre los que se contemplan el paralizar o interrumpir un servicio público de primera necesidad (transporte, servicio hospitalario, de combustible etc...); poner el riesgo la integridad de una persona mediante el lanzamiento de elementos contundentes , cortantes o punzantes; la destrucción de una vivienda o un local comercial o industrial, impedir la libre circulación de las personas o vehículos, impedir el trabajo de bomberos y la usurpación de inmuebles agrícolas, comercial e industrial.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

Adicionalmente, castiga con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo [541 días a 3 años /3 años y 1 día a 5 años] cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos punibles no constituyere una asociación ilícita.

El proyecto eleva por la modificación del artículo 269 del Código Penal las penas del delito de desordenes públicos los que turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado, incurrirán en la pena de reclusión menor en su grado mínimo, sin perjuicio de las que les correspondan por el daño u ofensa causados.

Finalmente, el proyecto incorpora al artículo 442 un nuevo inciso final que dispone se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo máximo [3 años y 1 día a 5 años] cuando el autor de robo en lugar habitado mediante el uso de escalamiento, fractura de puertas o uso de llaves falsas o ganzúas las perpetrare actuando en grupo o individualmente pero amparado en él, y tuvieron lugar con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público.

PROYECTO BOLETÍN N° 13.058-07.

(Coloma; García Huidobro; Pérez Varela, Von Baer y Ebensperger)

1º trámite constitucional. Comisión de Seguridad Pública del H. Senado

El proyecto de ley presentado en esta Corporación incorpora como agravante en el artículo 12 del Código Penal el cometer un delito durante la vigencia de un estado de excepción constitucional. Agregando a propósito



H. Senadora Luz Ebensperger O.

de un nuevo artículo 49 septies, de aplicación general, impone una pena accesoria de eliminación de beneficios, subsidios y aportes públicos de cualquier naturaleza, a quién resulte condenado por un delito cometido con ocasión de una manifestación u acto público que congrege un gran número de personas.

Agrega también un nuevo artículo 269 bis nuevo para penar a quién contraviene las reglas que la autoridad dictare para conservar el orden público o evitar que se altere durante la vigencia de un estado de excepción constitucional

Sanciona finalmente el robo en lugar no habitado pero destinado a la distribución o almacenamiento de alimentos, medicamentos, combustibles, mercaderías u otros bienes necesarios para la subsistencia humana, con ocasión de una manifestación u acto público que congrege un gran número de personas.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Conforme a la información proporcionada por la Subsecretaría del Interior en su “Informe Diario de Estado de Situación al 03.12.2019”, compilada conforme a los reportes de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI):

Desde el día 19 de octubre último, en el país se han incendiado 43 buses, se ha atacado a 1002 vehículos policiales; 129 ataques a estaciones de metro y 233 ataques a cuarteles policiales.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

El Ministerio de Interior ha presentado un total de 203 querellas y 1033 imputados invocando la Ley de Seguridad del Estado; y 534 querellas que representan a 521 imputados en regiones. Lo que sumados a otros ilícitos como incendios y barricadas suman un total de 775 querellas y 1560 imputados.

Sólo en la Región Metropolitana han presentado 124 querellas por saqueos a supermercados; 5 saqueos a malls; 6 saqueos a estaciones de metro o sus inmediaciones, 18 por saqueos a farmacias, 40 saqueos a tiendas. Lo que hace un total de 203 querellas por saqueos en el país (incluye viviendas, casas, plazas e iglesias). En regiones se han presentado a su vez 534 querellas en su mayoría por saqueos.

Finalmente, en cuanto al total de detenciones por estos y otros delitos durante esta crisis, se han realizado un total de 23.407 detenciones, de las cuales 22.251 (95%) personas permanecen en libertad y sólo se han dictado un 1.156 (5%) de resoluciones de prisión preventiva.

CONSIDERACIONES PARTICULARES.

Nuestra legislación penal ha demostrado su insuficiencia para prevenir y castigar a los violentistas que se han tomado nuestras calles marginando a todos los que tenían la intención de manifestarse pacíficamente.

No debe confundirse dos situaciones totalmente distintas que tipifica el proyecto. Una castiga a quién aprovechándose de una reunión o manifestación comete, al amparo de la muchedumbre, un ilícito; y, la



H. Senadora Luz Ebensperger O.

segunda, sanciona al grupo que -sin constituir una asociación ilícita, esto es, sin haberse reunido formalmente para delinquir-, en contexto de una calamidad o de una alteración del orden público delinquen. Se trata en consecuencia este segundo caso de un problema de participación, de coautoría.

De los diversos bienes jurídicos que buscamos proteger da cuenta la lista que enumera el nuevo artículo 268 septies: se trata de los derechos garantizados en la constitución, la libertad ambulatoria, la integridad corporal, la propiedad, la continuidad de los servicios básicos, etc. ¿que los diferencia entonces de los demás tipos penales que también resguardan esos bienes? las circunstancias de la acción.

Las conductas se despliegan en un contexto de aglomeración, al amparo de la masa, se busca impunidad porque se pretende ocultar la identidad en el gentío o porque se comparte la voluntad de dañar personas o cosas, se comparte un dolo común.

Ahora, esta situación no solo se supera con la modificación de una norma sustancial como el Código Penal, se debe estudiar en particular la relación de esta reforma con las normas procesales y la forma y diligencia en que jueces de garantía y fiscales tratan estos delitos. El proyecto sirve para afrontar la emergencia, pero hay asuntos de fondo, tales como la modificación o reemplazo de los primeros títulos de Libro II del Código Penal o la Ley de Seguridad del Estado (que data de 1958). Se trata, en definitiva, de mejorar las herramientas de combate de estos ilícitos.

Presidente;

Hoy, este Senado, actuando como jurado está llamado a juzgar una acusación constitucional desde un ámbito eminentemente jurídico. Tal ha sido el tenor de las exposiciones de la acusación y la defensa que hemos escuchado el día de ayer y jurídico debe ser necesariamente nuestro pronunciamiento. Buscamos establecer la existencia de una responsabilidad constitucional en la acción u omisión de un ex ministro de Estado porque la responsabilidad civil o penal, de haberlas, es competencia de los tribunales de justicia.

Al Ministro del Interior y Seguridad Pública, en cuanto colaborador inmediato del Presidente de la República, concentra la decisión política en materias de seguridad y orden público. Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, en cuanto integrantes de las fuerzas de orden público existen para dar eficacia al derecho conforme lo dispone el artículo 101 de la Constitución en relación con las disposiciones de la Ley N° 20.502 que Crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Precisamente, esa ley deja en claro a distinción entre la dirección normativa y directiva del Ministro del Interior -el control político diríamos- sobre la policía y otra un nivel operativo que ejerce, en terreno, en concreto, el alto mando institucional puesto que es de toda lógica que el personal especializado se haga cargo de esa materia y no los políticos.

En lo que respecta al estado de emergencia y las vulneraciones a los derechos humanos que se denuncia, el inciso final del artículo 43 de la Constitución Política de la República, señala expresamente que el Presidente de la República puede al decretarlo restringir las libertades de locomoción y de reunión garantidas en los numerales 7 y 13 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En particular, el artículo 5° de la Ley N° 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, durante la vigencia de la medida otorga al Jefe de la Defensa Nacional designado las facultades que le permiten, entre otros: Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona, para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional; Autorizar la celebración de reuniones en lugares de uso público, cuando corresponda, y velar porque tales reuniones no alteren el orden interno; y, Controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella.¹ Esas atribuciones han de entenderse necesariamente referidas al artículo 12 del mismo cuerpo legal que entiende suspendida una garantía constitucional cuando temporalmente se impide su ejercicio y restringida la misma cuando se limita su ejercicio en el fondo o la forma

La acusación cita profusamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención de los Derechos del Niño, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradante, entre otros. Pero lo cierto es que, desde la perspectiva del derecho internacional, por situaciones excepcionales puede también restringirse o limitarse el ejercicio de los derechos de reunión o movimiento.

Así por ejemplo, el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, autoriza a los estados parte en situaciones excepcionales en caso de peligro público u otra emergencia que amenace la seguridad del Estado y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, a

¹ Ver artículo 495 N° 1 del Código Penal castiga con multa de una unidad tributaria mensual al que (N°1) contraviniera a las reglas que la autoridad dictare para conservar el orden público o evitar que se altere, salvo que el hecho constituya crimen o simple delito

suspender el ejercicio de ciertos derechos reconocidos a las personas en ese instrumento de derecho internacional- siempre que no sea incompatible con las demás obligaciones asumidas por el país y que no impliquen una discriminación arbitraria. Obviamente los derechos que resulta lícito suspender no son aquellos que guardan relación con la vida, integridad y libertad pero si es posible hacerlo con el derecho a reunión o manifestación o la libertad ambulatoria.

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 4° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ambos casos debe comunicarse esa determinación a los estados miembros por intermedio de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (O.E.A) o de la Organización de Naciones Unidas (O.N.U), respectivamente.

En lo que respecta a los lamentables fallecimientos citados en la acusación, el detalle corresponde al siguiente:

a). ROMARIO WLADIMIR VELOZ CORTES: 26 años, ciudadano ecuatoriano, impacto balístico, en el contexto de una marcha que se realizaba en la Ruta 5, frente al Mall Plaza de La Serena, y cuando personal militar se encontraba en el lugar. Fiscalía abrió causa penal por homicidio y se está a la espera del peritaje del armamento del soldado ALEJANDRO MOLIVAN ROJAS BARRERA.

b). KEVIN PATRICIO GOMEZ MORGADO: chileno, 24 años, impacto balístico, en Coquimbo, en el contexto un robo al interior de una tienda La Polar. Uno de los integrantes de la patrulla militar usó su armamento de servicio en contra de las personas que habían hecho ingreso al local comercial. Causa por homicidio, en investigación por parte del Ministerio Público, en contra de CRISTIAN ISAAC CARE CARE, quien fue formalizado por homicidio. Tribunal decretó prisión preventiva y 120 días de

investigación. (la Fiscalía retiró los cargos el día 10/12/2019, porque la bala no era de calibre militar).

c). JOSÉ MIGUEL URIBE ANTIPANI: chileno, 25 años, murió por impacto balístico mientras se manifestaba en la ruta 5, en Curicó, ciudad que no se encuentra bajo estado de emergencia y, por lo tanto, tampoco con toque de queda. Ministerio Público abrió causa penal por homicidio y el Tribunal de Garantía de Curicó formalizó al funcionario del Ejército JUAN CARLOS ARANEDA REYES y decretó la prisión preventiva del soldado por su presunta participación mientras se realice la investigación.

d). MANUEL ALEJANDRO REBOLLEDO NAVARRETE: chileno, 22 años, murió por atropello, Talcahuano por atropello de un camión militar en Talcahuano. Los hechos ocurrieron tras el saqueo en Frigoríficos del Pacífico. El infante de marina involucrado LEONARDO ESTEBAN MEDINA CAMAÑO fue imputado por el cuasidelito de homicidio, quedó con arraigo nacional y con la cautelar de firma mensual. Se decretaron cuatro meses de investigación.

e). ALEX ANDRES NÚÑEZ SANDOVAL: falleció en la ex Posta Central por una contusión cerebral, en que se denuncia la participación de Carabineros, en Maipú. La Fiscalía abrió una investigación, con el apoyo de la Brigada de Homicidios y la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. Carabineros instruyó un sumario administrativo.

Dolorosos hechos los que describí que sin embargo constituyen una excepción en la que fue una respuesta necesaria y proporcional a los saqueos y destrozos de que todos fuimos testigos. Resulta apresurado tildar tales hechos de violaciones sistemática de los derechos humanos, primero porque la mayoría de los hechos denunciados en la propia acusación han de ser investigados y segundo, porque es una acusación extremadamente grave y requiere antecedentes concretos.

Para intentar caracterizar una violación hemos de recurrir a las normas que nos hemos dado, conforme a las disposiciones de la Ley N° 20.357, tipifica crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio y Crímenes y Delitos de Guerra, en relación con los principios enunciados en el Estatuto de la Corte Penal Internacional -el estatuto de Roma- pareciera, cómo bien lo señaló la defensa en sus descargos, que los actos que revisten esa característica han de ser cometidos como parte de un ataque generalizado, con múltiples víctimas, o sistemático, en el contexto de una política de un Estado o de un grupo organizado para mantener o instaurar una determinada política para atentar contra la población civil y ha de cometerse en el contexto de una discriminación política, nacional, racial, étnica, cultural, religiosa género u otros motivos reconocidos universalmente inaceptables con arreglo al derecho internacional. Es decir, se aprovecha el poder estatal para violar los derechos humanos. Evidentemente eso aquí no ha ocurrido.

Es más, entre los diversos oficios dirigidos a Carabineros, Instituto Nacional de Derechos Humanos y otras autoridades, ha quedado acreditado las instrucciones generales del ex ministro en orden mantener e instruir el respeto de los derechos humanos en el contexto del combate a las graves alteraciones de orden público que experimentábamos.

Durante su gestión se publicó la Circular N° 1.832 de Carabineros de Chile, sobre uso de la fuerza, que incorpora el principio de responsabilidad, que supone que se debe perseguir: al funcionario que cometa los actos u omisiones que importen el abuso en el uso de la fuerza; a los mandos llamados a dictar órdenes, supervisar y/o controlar la legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de esta por parte de los subalternos.

El mismo sentido, la la Orden General N° 2.635, que actualiza los protocolos mantención de orden público, en cumplimiento de la instrucción presidencial de realizar dicha actualización dentro del plazo de 90 días, lo

que permitió en definitiva unificar los protocolos e incorporar reglas específicas en protección de niños, niñas y adolescentes.

En definitiva, no se ha logrado acreditar la participación de don Andrés Chadwick en la infracción u omisión de las normas constitucionales y legales de la que se le acusa, no existe un nexo causal entre los lamentables hechos descritos en el documento con el actuar del ex ministro, por lo que es dable concluir que actuó dentro de sus facultades constitucionales y legales, y no se ha podido probar la existencia de hechos u omisiones que le sean imputables según las causales constitucionales de esta acusación por lo que en definitiva ambos capítulos de la acusación deben ser rechazados. Anuncio mi voto en contra de ambos. He dicho señor presidente.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

BOLETÍN N° 12.409-03

Denominación:	Establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores.
Origen:	Ejecutivo (M. Economía)
Trámite:	2º Constitucional H. Senado/ Comisión de Economía
Urgencia:	Acuerdos de Comités
Otros comentarios:	Votación en general.Ley del Sernac Financiero N° 20.555 (1er Gobierno Presidente Piñera)

CONSIDERACIONES.

El proyecto de ley modifica la Ley N° 19.496, que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores en orden a concordar las disposiciones de protección con los derechos reconocidos en la Ley N° 18.010, que Establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica, que consisten, en lo sustancial, en la prohibición de cobro en operaciones de crédito de dinero por sobre el interés máximo convencional y el derecho a que, una vez transgredido y sin perjuicio del delito de usura, a que se rebajen a intereses corrientes en plaza -según el interés determinado por la Comisión para el Merado Financiero para ese tramo- a lo que se agrega la indemnización de perjuicios. En este orden de ideas, es del caso recordar que el artículo 38 del primero de esos estatutos establece que cometen infracción a esa ley, los proveedores que cobren intereses por sobre el interés máximo convencional a que se refiere la ley N° 18.010.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

En el mismo orden de ideas, la modificación al artículo 17 D permite el prepago de operaciones de crédito de dinero cuando el deudor se trate de una persona natural/usuario final del crédito -excluyendo a las personas jurídicas y comerciantes por ejemplo- sin importar el monto. Hoy por operaciones de menos de 5000 Unidades de Fomento se puede siempre prepagar pagando hasta el equivalente un mes de intereses. Asimismo, y en concordancia por ejemplo con el proyecto de portabilidad financiera, los proveedores deberán entregar a los consumidores que lo soliciten, dentro del plazo de cinco días hábiles, los certificados y antecedentes que sean necesarios para renegociar los créditos sin costo alguno. (desde el plazo actual de 10 días). Se rebaja directamente en la ley 18.010 el límite de 20 a 10% bajo del crédito bajo el cual el acreedor, conforme a las regla general del Código Civil, puede rehusar recibir el pago de la obligación.

El proyecto restringe también el derecho del proveedor de servicios y servicios financieros para retractarse unilateralmente del contrato cuando la oferta del mismo se haya efectuado por medio de catálogos, avisos o **medios electrónicos**. De todas maneras, se encarga a un reglamento dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo regulará aquellos productos respecto de los cuales no se podrá ejercer el derecho de retracto por parte del proveedor atendida la naturaleza del servicio. No obstante, lo dicho, debería considerarse la determinación de esta causal y los requisitos de información al cliente.

Conforme al artículo 2° de la Ley que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, los contratos de educación universitaria los contratos de educación técnico profesional y universitaria.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

De ahí que el proyecto creando un nuevo artículo 3° quáter el deber de los establecimientos de educación superior, institutos profesionales y de formación técnica deberán otorgar gratuitamente, una vez al año, los certificados de estudios y/o de notas, a solicitud del alumno o de aquel que haya suspendido sus estudios o se encuentre moroso en la respectiva institución educacional. Beneficio que bien podría extenderse a todos los alumnos regulares o no de esas instituciones de educación superior.

El texto propuesto, obliga también a los fabricantes, importadores y vendedores de vehículos nuevos (entre los que se comprenden los usuarios ZOFRI) a asegurar al adquirente la libre elección de servicios técnicos destinados a la mantención del bien con el propósito de materializar los derechos de los artículos 19 y 20 de esa ley referentes a la reposición del producto defectuoso, o, la reparación gratuita del bien o, previa restitución del mismo, su reposición o la devolución de la cantidad pagada. Aumentando el plazo regular de 3 meses (pasa a ser 6 meses) para ejercer ese derecho contado desde la entrega del bien a los 2 años o 100.000 kilómetros del automovil de que se trate. Conviene en tal caso estudiar la concordancia de la ampliación del plazo de 3 meses a los vicios redhibitorios (art. 1837 del Código Civil) .y a la convención sobre compraventa internacional de mercaderías que podría estar transgrediéndose.

Crea igualmente el texto una especie de *principio de equivalencia* conforme al cual se tendrán por no escritas -una especie de nulidad parcial conforme a la doctrina civil- las cláusulas que establezca medios para ejercer los derechos (entre ellos poner término al contrato) en condiciones más gravosas que aquéllas utilizadas para su celebración. Pudiendo en ese caso consumidor a su arbitrio ejercer tales derechos en la misma forma y condiciones que las utilizadas para la suscripción del acto o contrato. Para



H. Senadora Luz Ebensperger O.

esos mismo efectos, la modificación propuesta al artículo 17 A en orden adaptar la letra de la ley a la fiscalización de los contratos de adhesión y para el ejercicio efectivo por parte del consumidor o usuario final de los mismos por los mismos canales tecnológicos antes descritos, entre los que se encuentra obviamente el ponerles término.

Por la introducción de un nuevo artículo 39 D se limita el otorgamiento de tarjetas de crédito y líneas de crédito a estudiantes de educación superior. Para ese objeto las instituciones financieras deberán corroborar (“exigirles acreditar” reza la disposición) la circunstancia de contar con recursos económicos suficientes para solventar las obligaciones que surjan de estos actos o, en su defecto, que constituyan una garantía personal que caucione el cumplimiento de tales deudas.

Finalmente, agregandose un nuevo artículo 23 bis a la Ley que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores y modificandose los artículos 131 y siguientes del Código Aeronautico, para regula la sobreventa de pasajes, los derechos de los pasajeros por la denegación de embarque, las indemnizacions y mitigación en su caso y los mecanismos de denuncia y reclamo y las multas por infracción de estas disposiciones, entre otras materias. Reglamento (CE) n° 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos y en general una revisión del contrato de transporte o pasaje aereo a las nuevas realidades del mercado que hoy oferta y opera por canales virtuales, con promocios u ofertas dinamicas y en una escala internacional.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

BOLETÍN N° 2667-10

Denominación:	Aprueba Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Origen:	Mensaje
Trámite:	2° Constitucional H. Senado/ Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género.
Urgencia:	Acuerdo de Comités
Otros comentarios:	<p>El artículo 17 del Protocolo señala expresamente que no admite reservas.</p> <p>Se ha formulado una declaración interpretativa por parte del Estado de Chile en orden a resguardar a vida del que está por nacer. No obstante, no tiene efecto práctico y puede ser retirada en cualquier momento por el Estado.</p>



H. Senadora Luz Ebensperger O.

CONSIDERACIONES.

Conforme lo dispone el artículo 1° del protocolo todo Estado Parte (Chile desde la ratificación del protocolo) reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (“el Comité”) para conocer de las comunicaciones (sinonimos de denuncias en el lenguaje del derecho internacional) de cualquier persona o grupo de personas que se hallen bajo la jurisdicción del Estado y que aleguen ser víctimas de una violación a los derechos enunciados en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (nuestro país es parte desde 1989).

Presentada una comunicación, el Comité puede solicitar la adopción de medidas provisionales necesarias -urgentes- para evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación. En cualquier caso, Chile tendrá un plazo de seis meses para presentar al Comité por escrito explicaciones o declaraciones en las que se aclare la cuestión sometida a su conocimiento.

Nuestro país se obliga a atender y dar debida consideración a las opiniones y recomendaciones del Comité. En un plazo de seis meses desde su recepción, deberá enviar por escrito información sobre las medidas adoptadas en función de las opiniones y recomendaciones del Comité. En cualquier momento del proceso, el Comité podrá invitar al Estado parte a presentar más información sobre cualesquiera medidas que el Estado Parte hubiera adoptado en respuesta a las opiniones o recomendaciones del Comité. (podría incluir la visita del Comité a nuestro país).



H. Senadora Luz Ebensperger O.

De las observaciones y conclusiones del Comité y en un plazo de seis meses después de recibir los resultados de la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité, Chile podrá presentar sus propias observaciones al Comité. Todo el proceso reviste el carácter de secreto.

Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer significa una cesión importante de la soberanía nacional. Toda vez que hasta ahora discusiones políticas y legislativas podrán ser guiadas en base a las recomendaciones del Comité.

Esas recomendaciones no son pacíficas. En efecto, el Comité se ha manifestado preocupado por: el límite de la objeción de conciencia por parte de personas o instituciones que podría dificultar el acceso a las mujeres al aborto, la capacitación de la judicatura en materia de pueblos indígenas o la creación del Ministerio, o la ratificación de la Declaración de Beijing (1995).

Nuestro país ha ido implementando de mutuo propio medidas administrativas -y en particular este Congreso- promulgado leyes, con estándares superiores a las recomendaciones del Comité, que han permitido en general reconocer la igualdad de la mujer ante la ley, eliminar las formas de discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país; para asegurarle la igualdad de derechos en la esfera de la educación y garantizar el acceso a servicios de atención médica.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

El votar el Protocolo compromete ciertamente también la responsabilidad internacional del Estado de Chile, que podría afectar incluso la independencia de nuestros tribunales de justicia, toda vez que nuestra legislación interna contempla los recursos judiciales eficaces para reclamar el cumplimiento de los derechos reconocidos por la Convención, por la Constitución y las leyes.

El Comité CEDAW está compuesto por 23 expertos en materia de derechos de la mujer procedentes del mundo entero. Esas expertas, una vez analizadas su formación y publicaciones, en caso alguno revisten el carácter de independiente. Cada una de ellas tiene apriori una visión de la sociedad, o una opinión en temas económicos o valoricos que nosotros, como sociedad, aun discutimos en términos políticos y que, de aprobar este protocolo facultativo nos podrían resultar impuestas en temas diversos a los que guardan relación con las materias de la Convención. Ello obviamente

Por lo dicho, es que se recomienda votar en contra de la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).



H. Senadora Luz Ebensperger O.

BOLETÍN N° 11687-04

Denominación:	Establece la condición socioeconómica de los estudiantes a los que deberán otorgarles estudios gratuitos las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019, de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la Ley de Educación Superior.
Origen:	Ejecutivo (MINEDUC)
Trámite:	1º Constitucional H. Senado/ comisión de educación
Urgencia:	Acuerdos de Comités
Otros comentarios:	Votación en particular

RESUMEN

El proyecto de ley busca extender el beneficio de la gratuidad a aquellos estudiantes que provienen de hogares pertenecientes al séptimo decil socioeconómico y que asisten a los centros de formación técnica e institutos profesionales adscritos al financiamiento institucional para la gratuidad, en conformidad a la ley N° 21.091, sobre Educación Superior.

En sus cuatro artículos hace extensivo el beneficio de la gratuidad universitaria para carreras técnico de nivel superior o títulos profesionales impartidas por Centros de Formación Técnica y Centros de Formación Técnica estatales creados de acuerdo a la ley N° 20.910, o Institutos



H. Senadora Luz Ebensperger O.

Profesionales, y carreras y programas de estudios impartidos por universidades respecto a títulos de técnico de nivel superior o títulos profesionales que no otorguen grado. Según la aplicación general de la gratuidad universitaria en los términos del artículo 34 transitorio de la ley N° 21.091 ligado a la evolución de los ingresos fiscales estructurales.

Las instituciones deberán en todo caso dar cumplimiento a las condiciones de reconocimiento oficial, acreditación institucional, fijación de aranceles, entre otros. Estableciéndose dichas sumas en el intertanto por decreto del Ministerio de Educación, suscrito también por el Ministro de Hacienda Mientras no se encuentren vigentes la o las resoluciones exentas que establezcan los valores regulados de arancel, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación de un grupo de carreras o programas de estudio determinado

En lo que dice relación con el número total e importancia de las carreras técnicas profesionales, Subsecretario de Educación informó a la comisión de hacienda durante el trámite en particular el siguiente detalle:

Institución /Año	2007	2012	2018
Centros de Formación Técnica	86.847	140.031	136.773
Técnico de Nivel Superior	86.847	140.031	136.773
Institutos Profesionales	156.126	293.519	373.669
Técnico de Nivel Superior	56.780	135.185	183.598
Profesional sin Licenciatura	99.346	158.334	190.071
Universidades	49.969	69.406	58.836
Técnico Nivel Superior	22.193	29.203	29.434
Profesional sin Licenciatura	27.776	40.045	29.402



H. Senadora Luz Ebensperger O.

En cuanto al número potencial de beneficiados, esa autoridad indicó que corresponden a:

(Cifras en miles de pesos 2019)	2022	2023	2024	2025
Gasto Fiscal Incremental para Gratuidad Universidades-7° decil Carreras Técnicas y Profesionales sin Licenciatura (1)	4.225.124	4.636.341	4.994.736	7.012.634
Gasto Fiscal Incremental en Becas de Educación Superior considerando 7° decil en Universidades-7° decil Carreras Técnicas y Profesionales sin Licenciatura (2)	-1.532.238	-1.690.877	-1.828.570	-2.180.824
Mayor Gasto Fiscal Total (1) +(2)	2.692.886	2.945.464	3.166.166	4.831.810
Número de Estudiantes Beneficiados en Universidades	2.458	2.704	2.917	3.977

En lo que resguarda el financiamiento del beneficio (con cargo a la Partida Ministerio de Educación de la Ley de Presupuestos y transferencias desde la Partida Tesoro Público), según información proporcionada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES)

Según informe esa Dirección en su informe financiero acompañada a la indicación del Ejecutivo durante la tramitación del proyecto, el gasto asociado a esta indicación se presenta para el período 2022-2025 considerando que esta compromete el presupuesto fiscal a partir del tercer año desde la publicación de la ley, y que, de acuerdo a los supuestos de entrada según acreditación, el proceso de incorporación de las universidades acreditadas a gratuidad concluiría en el año 2025.